

**REPÚBLICA DE COLOMBIA**



**RAMA JUDICIAL  
SALA QUINTA DE DECISIÓN LABORAL**

**MAGISTRADA PONENTE: MARIA NANCY GARCÍA GARCÍA**

<b>PROCESO</b>	<b>ORDINARIO</b>
<b>DEMANDANTE</b>	<b>RAÚL HERNANDO MONTOYA ARREDONDO</b>
<b>DEMANDADOS</b>	<b>ARLEY ARREDONDO MARTÍNEZ, VÍAS S.A., CONSTRUCCIONES y TRACTORES S.A. – CONYTRAC S.A. (integrantes del consorcio vial “LAS MIRLAS”), y la EMPRESA DE DESARROLLO URBANO – EDU.</b>
<b>LLAMADAS EN GARANTÍA</b>	<b>ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA LTDA. y MUNICIPIO DE MEDELLÍN</b>
<b>PROCEDENCIA</b>	<b>JUZGADO DÉCIMO LABORAL DEL CTO DE MEDELLÍN</b>
<b>RADICADO</b>	<b>05001 31 05 010 2016 01296 01</b>
<b>SEGUNDA INSTANCIA</b>	<b>APELACIÓN</b>
<b>TEMAS Y SUBTEMAS</b>	<b>- RELACIÓN LABORAL - SOLIDARIDAD LABORAL Art. 34 CST - INDEMNIZACIÓN MORATORIA</b>
<b>DECISIÓN</b>	<b>REVOCA PARCIALMENTE y MODIFICA</b>

**SENTENCIA No. 255**

Medellín, treinta y uno (31) de octubre de dos mil veintidós (2022)

En atención a lo previsto en el decreto 806 del 4 de junio de 2020 convertido en legislación permanente a través de la Ley 2213 de 2022, una vez discutido y aprobado en la SALA QUINTA DE DECISIÓN LABORAL el presente asunto, según consta en Acta No. 058 de 2022, se procede a dictar **SENTENCIA** en orden a resolver los recursos de apelación formulados por los apoderados judiciales del **DEMANDANTE** y los accionados **VÍAS S.A. CONSTRUCCIONES y TRACTORES S.A. - CONYTRAC S.A. (integrantes del consorcio vial “LAS MIRLAS”), y ARLEY ARREDONDO MARTÍNEZ**, contra la Sentencia No. 230 del 14 de septiembre de 2021, proferida por el Juzgado Décimo Laboral del Circuito de Medellín.

**ANTECEDENTES**

El señor **RAÚL HERNANDO MONTOYA ARREDONDO** presentó demanda ordinaria laboral en contra de las sociedades **VÍAS S.A., CONSTRUCCIONES y TRACTORES S.A. (integrantes del consorcio vial “LAS MIRLAS”), ARLEY ARREDONDO MARTÍNEZ, y la EMPRESA DE DESARROLLO URBANO – EDU**, con el fin de que: **1)** Se condenen de forma conjunta y solidaria a las demandadas al pago de la suma de \$1.796.857 por concepto de salarios, así como las cesantías, primas de servicios y vacaciones causadas por el periodo laborado desde el 12 de octubre de 2015 al 21 de noviembre de 2015. **2)** Así mismo, solicitó el pago de la indemnización por despido sin justa causa, la sanción moratoria consagrada en el artículo 65 CST, y la indexación de las sumas resultantes.

Sustentó sus peticiones en que, desde el 12 de octubre de 2015 prestó sus servicios personales como trabajador en favor del señor **ARLEY ARREDONDO**, en su calidad de contratista del consorcio “LAS MIRLAS”, conformado por las sociedades **VÍAS S.A. y CONSTRUCCIONES y TRACTORES S.A.**, y de la **EMPRESA DE DESARROLLO URBANO – EDU**; vínculo laboral que se dio de manera verbal y a término indefinido, a través de la supuesta empresa denominada CONSTRUCCIÓN TECHOS Y PISOS, a través de la cual fue contratado para prestar los servicios de manera personal, subordinada, recibiendo como contraprestación un salario catorcenal de \$800.000.

Que su vinculación se hizo en el marco del contrato celebrado entre la **EMPRESA DE DESARROLLO URBANO – EDU** y el consorcio “LAS MIRLAS”, precisamente para la construcción del circuito vial del mismo nombre en el municipio de Medellín. No obstante, indicó que fue despedido sin justa causa el 21 de noviembre de 2015, fecha para la que le eran adeudados todos los salarios devengados durante el periodo trabajado.

Que, en el mes de diciembre de 2015, el citado consorcio le hizo un abono por la suma de \$549.733, restando la suma de \$1.796.857; al igual que lo correspondiente por prestaciones sociales, vacaciones e indemnización por despido.

Expuso que el 23 de febrero de 2016 reclamó ante la **EMPRESA DE DESARROLLO URBANO – EDU** el pago de prestaciones y salarios adeudados, recibiendo respuesta negativa el 15 de marzo de esa misma anualidad. Que reiteró solicitudes de pago ante la **EMPRESA DE DESARROLLO URBANO – EDU** el 1 de abril, 11 de julio y 22 de septiembre de 2016, empero tales reclamos fueron resueltos de manera negativa por parte de esa entidad (f. 114 a 17 Archivo 01 ED).

Que el 28 de abril de 2016 los integrantes del consorcio “LAS MIRLAS” no asistieron a diligencia de conciliación citada ante el Ministerio del Trabajo, expidiéndose constancia de no comparecencia No. 549 de 2016.

### **POSICIÓN DE LAS ACCIONADAS**

En el momento procesal oportuno, la sociedad **VÍAS S.A.** se opuso a lo solicitado en la demanda, tras alegar que no conoce al demandante, ni la persona con la que dijo haber sostenido una relación laboral. En consecuencia, propuso las excepciones que denominó:

“(…) *PRESCRIPCIÓN, BUENA FE e INEXISTENCIA DE LA OBLIGACIÓN* (…)” (f. 1 a 120 Archivo 01 ED). En igual sentido se pronunció la demandada **CONSTRUCCIONES y TRACTORES S.A. – CONYTRAC S.A.** (f. 121 a 127 Archivo 01 ED).

Por otro lado, el curador *Ad-Litem* del demandado **ARLEY ARREDONDO** propuso como excepciones las de “(…) *FALTA DE LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA POR ACTIVA; FALTA DE LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA POR PASIVA; INEXISTENCIA DE LA OBLIGACIÓN; COBRO DE LO NO DEBIDO; BUENA FE; MALA FE; PRESCRIPCIÓN; AUSENCIA DE CONTRATO DE TRABAJO ENTRE RAÚL HERNANDO MONTOYA ARREDONDO y ARLEY ARREDONDO y AUSENCIA DE REQUISITOS LEGALES – CONTRATO DE TRABAJO* (…)” (f. 362 a 368 Archivo 01 ED).

Por su parte, la **EMPRESA DE DESARROLLO URBANO – EDU** dio respuesta a la demanda manifestando que esta entidad suscribió el Contrato Interadministrativo No. 4600049669 de 2013 con el **MUNICIPIO DE MEDELLÍN**, que tenía por objeto la “*GERENCIA Y COORINACIÓN PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO URBANO INTEGRAL PUI CENTRO ORIENTAL (2012-2015)*”, en el que, previo proceso de selección para contratar la “*CONSTRUCCIÓN DEL CIRCUITO VIAL LAS MIRLAS EN EL MUNICIPIO DE MEDELLÍN*”, escogió al contratista “**LAS MIRLAS**”, conformado por las sociedades **VÍAS S.A.** y **CONSTRUCCIONES y TRACTORES S.A.**, razones por las que consideró, que el único responsable de lo peticionado en la demanda es el citado consorcio. Por tanto, formuló las excepciones de: “(…) *FALTA DE LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA; AUSENCIA DE NEXO CAUSAL; BUENA FE; INEXISTENCIA DE LA OBLIGACIÓN y PRESCRIPCIÓN* (…)” (f. 161 a 151 Archivo 01 ED).

Dicha demandada formuló llamamiento en garantía en contra de las sociedades **ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA, CONFIANZA S.A., LUIS ALBERTO DE LOS RÍOS PINEDA** y el **MUNICIPIO DE MEDELLÍN**, petición admitida por el Juzgado en Auto del 28 de abril de 2017 (f. 322 a 338 y 343 a 356 Archivo 01 ED).

El llamado en garantía **MUNICIPIO DE MEDELLÍN**, manifestó que no sostuvo relación de trabajo con el accionante, y en atención a la cláusula de indemnidad contenida en el contrato suscrito con la EDU, esta última debe mantener libre al ente territorial de cualquier daño o perjuicio originado de reclamaciones a terceros. Formuló las excepciones de: “(…) *FALTA DE LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA POR PASIVA; INEXISTENCIA DE LA OBLIGACIÓN; AUSENCIA DEL NEXO CAUSAL; BUENA FE; INEXISTENCIA DE LA OBLIGACIÓN PARA INDEMNIZAR; COMPENSACIÓN; PRESCRIPCIÓN; PAGO DE LO NO DEBIDO y CLAUSULAS DE INDEMNIDAD Y EXCLUSIÓN DE RESPONSABILIDAD* (…)” (f. 422 a 431 Archivo 01 ED).

Finalmente, la sociedad **ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA LTDA.** adujo no constarle ninguno de los hechos de la demanda, y frente al llamamiento, alegó que si bien se suscribió la póliza No. 520-47-99400030486, esta opera sujeta a exclusiones de cobertura según lo pactado. Solicitó declarar probadas las excepciones de: “(…) *INEXISTENCIA DE LA RELACIÓN LABORAL Y DE SOLIDARIDAD; COBRO DE LO NO DEBIDO; INEXISTENCIA DE LA OBLIGACIÓN; COMPENSACIÓN y PRESCRIPCIÓN;*

*IMPROCEDENCIA O INEFICACIA DEL LLAMAMIENTO EN GARANTÍA A LA ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA, PARA RESOLVER EL CONFLICTO ENTRE LA EDU Y EL CONSTRUCTOR; FALTA DE COBERTURA DE LA PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO QUE AMPARA EL CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 10 DE 2015; APLICACIÓN RESTRICTIVA DEL CONTENIDO DEL CONTRATO DE SEGURO Y SUS CONDICIONES GENERALES; FALTA DE PRUEBA DEL DERECHO PARA LLAMAR EN GARANTÍA – FALTA DE LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA POR ACTIVA; AUSENCIA DEL ORIGINAL O COPIA AUTÉNTICA DE LA PÓLIZA; AUSENCIA DE COBERTURA DE LAS SANCIONES Y OTROS CONCEPTOS NO SALARIALES, NI PRESTACIONALES; RIESGO INASEGURABLE – ACTOS MERAMENTE POTESTATIVOS DEL TOMADOR, ASEGURADO BENEFICIARIO EN LAS PÓLIZAS DE CUMPLIMIENTO; INEXISTENCIA DE COBERTURA DE LAS PÓLIZAS DE CUMPLIMIENTO DE ENTIDADES ESTATALES; CUMPLIMIENTO DEL AMPARO HASTA POR EL MONTO DE LA SUMA ASEGURADA; COMPENSACIÓN y PRESCRIPCIÓN (...)” (f. 475 a 523 Archivo 01 ED).*

Por Auto del 17 de abril de 2018 el Juzgado de primera instancia tuvo como ineficaz el llamamiento formulado en contra de la aseguradora **CONFIANZA S.A.** y el señor **LUIS ALBERTO RÍOS PINEDA** (f. 578 Archivo 01 ED).

### **SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA**

Surtido el trámite de primera instancia, el Juzgado Décimo Laboral del Circuito de Medellín, mediante Sentencia No. 230 del 14 de septiembre de 2021 decidió:

*“(...) 1. DECLARAR la existencia de un contrato de trabajo celebrado verbalmente y a término indefinido, entre los Señores RAUL HERNANDO MONTOYA ARREDONDO como trabajador y ARLEY ARREDONDO MARTINEZ como empleador, entre el 12 de octubre y el 21 de noviembre de 2015, el cual terminó por despido injusto, de conformidad con lo expresado en la parte motiva.*

*2. CONDENAR al Señor ARLEY ARREDONDO MARTINEZ, y de manera solidaria al CONSORCIO LAS MIRLAS, conformado por las sociedades CONYTRAC S.A. y VIAS S.A., al reconocimiento y pago a favor del Señor RAUL HERNANDO MONTOYA ARREDONDO portador de la C.C. 71.655.862, de las prestaciones causadas a su favor durante y al término de la relación laboral declarada en el numeral precedente, la indemnización por despido injusto y los aportes obligatorios para cubrir el riesgo de pensiones, aplicando de manera oficiosa los pagos parciales reconocidos por el rubro de salarios y prestaciones sociales en cuantía de \$2.491.211.00, conforme se indicó en la parte motiva de esta sentencia, lo que arroja un saldo a favor de las sociedades que asumieron dichos pagos, en cuantía de \$283.570.00 por dichos conceptos.*

*3. CONDENAR al Señor ARLEY ARREDONDO MARTINEZ al reconocimiento y pago a favor del Señor RAUL HERNANDO MONTOYA ARREDONDO, de la indemnización moratoria consagrada en el Artículo 65 del CST, por no haber cancelado al término del contrato las prestaciones adeudadas, cuya cuantía por los dos primeros años siguientes a la exigibilidad de las obligaciones que dan lugar a dicha sanción, asciende a \$13.604.500.00, de conformidad con lo expresado en la parte motiva.*

*4. ABSOLVER a la EMPRESA DE DESARROLLO URBANO – EDU, al MUNICIPIO DE MEDELLIN y la ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA de las pretensiones*

*formuladas en su contra por el Señor RAUL HERNANDO MONTOYA ARREDONDO, por lo expresado en la parte motiva de esta providencia.*

*5. Las excepciones de mérito formuladas por los integrantes de la parte pasiva, han quedado implícitamente decididas con las consideraciones de instancia, sin hallar prosperidad.*

*6. Costas en esta instancia a cargo de ARLEY ARREDONDO MARTINEZ y solidariamente a las sociedades integrantes del CONSORCIO VIAL LAS MIRLAS, a saber, CONYTRAC S.A. y VIAS S.A., por lo expresado en las consideraciones finales. Inclúyase en este rubro, a título de Agencias en Derecho el equivalente 3.5% de la condena impuesta, atendiendo lo dispuesto en el Acuerdo PSAA16-10554 del 5 de Agosto de 2016, dada la prosperidad de las pretensiones. La suma a pagar por este rubro es \$476.157.00, pudiendo las sociedades afectadas con este rubro compensar con la suma de dinero pagada en exceso a título de prestaciones y salarios, lo que les correspondiere asumir por estas Costas. (...)”.*

## **RECURSOS DE APELACIÓN**

### **DE VÍAS SA Y CONTRAC SAS.**

Inconforme con la decisión, el apoderado de las demandadas **VÍAS S.A.** y **CONYTRAC S.A.** interpuso el recurso de apelación solicitando, en primera medida, la revocatoria de la solidaridad concluida en materia de costas procesales, ya que, pese a no atacar el valor impuesto por este concepto, precisó que no existió mala fe de parte del señor **ARLEY ARREDONDO** en torno a su obligación de cancelar las prestaciones sociales en favor del demandante, como quiera que sus representadas acudieron al juicio y realizaron el pago de lo adeudado, atendiendo el llamado de la justicia. Que, a pesar de haber sido absueltas del pago de la sanción moratoria del artículo 65 CST, las costas procesales fueron tasadas con base la condena por aquel concepto, caso en el que, indicó, si no hay mala fe de su parte, tampoco hay lugar a participar de la condena en costas basada exclusivamente en aquella indemnización, toda vez que no se trata de las condenas emitidas por salarios y prestaciones insolutas declarados por el Despacho.

Que, de no ser acogido lo anterior, se revise lo atinente al valor del salario tenido por el *a quo*, correspondiente a la suma de \$845.000, conclusión que en su criterio fue contradictoria, pues si bien estuvo fundamentada en una confesión, esta no debe favorecer al demandante, y, teniendo en cuenta que ese valor difiere del establecido en la demanda, no existe prueba de ninguno de estos valores, sin que pueda tomarse este de lo expuesto en el interrogatorio, razón por la que, sin oponerse a la solidaridad declarada, ya que su propósito no es vulnerar derechos del actor, es viable presumir que este percibió la suma equivalente al SMLMV de ese año, equivalente a \$644.350, lo que traería la modificación a las condenas.

Solicitó la revocatoria de la condena por despido injusto, como quiera que la desvinculación se decidió por quien no era su empleador, lo que no guarda lógica con el ordenamiento laboral, toda vez que el patrono es el facultado para despedir al trabajador, momento en el que no puede considerarse con relevancia jurídica frente al despido, los actos que realice una persona ajena a la relación laboral, debiendo tenerse en consideración lo señalado por los testigos, en el entendido que no se les permitió más el ingreso a la obra, ante la falta de vínculo con su empleador, suceso que en parte alguna puede equipararse a un despido. De ahí que no puede concluirse que el vínculo culminó de manera unilateral e

injusta, dado que se desconoce si el actor renunció, laboraba en otra parte, o culminó su contrato de mutuo acuerdo.

### **DEL DEMANDADO ARLEY ARREDONDO MARTÍNEZ.**

De otro lado, el curador del demandado **ARLEY ARREDONDO MARTÍNEZ** discutió lo relativo a los extremos temporales, alegando que, a pesar del pago efectuado por los codemandados, el extremo demandante no cumplió la carga de demostrar el periodo temporal en el que basa sus pretensiones (Art. 166 y siguientes CGP), puntualmente lo relacionado con el extremo final del contrato de trabajo, aunado a que, durante el mismo periodo de octubre y noviembre de 2015 aparecen cotizaciones a pensión con empleadores como “*Vértice Ingeniería*” y “*Serviconflex S.A.*”. Agregó que, los efectos de la confesión se aplican únicamente en aquellos puntos que perjudican a quien confiesa, ello para resaltar que, en punto del salario determinado por el Juez, no estuvo demostrado en el infolio; indicando que, de haberlo, correspondió al SMLMV.

En cuanto a la indemnización por despido injusto, aseguró que su prohiado debe ser absuelto de esta pretensión, al no estar demostrado el hecho del despido según las pruebas recaudadas. Luego, expuso frente a la indemnización moratoria, que el actuar del demandado está cobijado por el principio de buena fe del artículo 83 CN, supuesto que no resultó quebrantado con base en los elementos de convicción del proceso, sin que esta sanción proceda, al tenor de lo considerado por la Jurisprudencia, de manera automática, sino que debe analizarse la conducta del empleador, que, en el presente caso, mostró buena fe.

### **DEL DEMANDANTE, RAUL HERNANDO MONTOYA ARREDONDO**

Finalmente, la apoderada del **DEMANDANTE** apeló diciendo que el Juez de primer grado no tuvo en cuenta lo alegado por ella en torno a la Jurisprudencia aplicable para resolver el asunto, destacando que, a pesar de contar los Jueces con facultades y autonomía en sus decisiones, deben presentar los argumentos para apartarse del precedente, lo que no efectuó el *A quo*, haciendo relación en este aspecto al hecho de no reconocerle el *a-quo* mérito probatorio a la liquidación de prestaciones aportada con la reforma a la demanda. Afirmó estar de acuerdo con la declaratoria del contrato, pero no con los extremos y el salario, al alegar que el Juzgado no se pronunció sobre una prueba específica adjuntada en la que se observan pantallazos de correo electrónico del 31 de mayo de 2016, oportunidad en la que se realizó la liquidación de prestaciones, documento que muestra el inicio de la relación el 21 de octubre de 2015 y la finalización el 21 de noviembre de ese año, con un salario de \$1.200.000, más un auxilio de transporte de \$74.000, siendo esa suma la que debe tenerse como salario, aclarando que el accionante adujo en su interrogatorio de parte que el salario percibido era de \$845.000 catorcenales.

Así mismo expuso que, a la hora de liquidar, el Despacho no tuvo en cuenta el auxilio de transporte, el cual es base para liquidar las prestaciones sociales como cesantías, intereses, y prima de servicios, sumado a que son 41 días de servicio y no 40, atendiendo al límite final de la relación, a partir de lo cual deprecó el reajuste de las condenas.

Frente al tema de la solidaridad deprecada respecto de **VÍAS S.A.** y **CONYTRAC S.A.**, aun cuando se reconoce en la sentencia que son responsables solidarios, no se les condenó al pago de la sanción moratoria, condición que también refirió, debió predicarse para la **EDU**, alegando que, de conformidad con pronunciamientos de la Sala de Casación

Laboral de la CSJ, no es necesario que los objetos sociales sean exactamente iguales sino que se debe examinar cual fue la labor que presentó el trabajador y si esta pudo haber beneficiado al objeto social del beneficiario de la obra, sumado a que, si la **EMPRESA DE DESARROLLO URBANO** no gestiona la construcción, se quedarían sin piso sobre sus actuaciones, incluso sin ejecutar su presupuesto.

En lo referente a la sanción moratoria de que trata el artículo 65 CST, mencionó que el Juez de primera instancia se apartó de lo señalado por la Jurisprudencia, pues el análisis de su procedencia se efectúa respecto del empleador, y no de las actuaciones de los obligados solidarios, por lo que el actuar de estos no exonera al primero de su pago, circunstancias en virtud de las cuales, conforme lo dicho en Sentencias SL527-2013 y la dictada dentro del Rad. 31255 el 17 de abril de 2015, hacen recaer el pago de la sanción en los responsables solidarios, independiente de las actuaciones de estos, insistiendo en que deben condenarse los demandados (consorcio y EDU).

Añadió que, resultaba extraño que no se tuvieron en cuenta actuaciones del consorcio, como, por ejemplo, haber negado el vínculo laboral del demandante, pese a lo señalado en la contestación a la demanda, así como la negación acerca de la comunicación vía correo electrónico, y el envío de una persona del Ministerio del Trabajo para que hablara con el actor, a fin de verificar la existencia de una obligación pendiente de pago.

A lo anterior, añade, se suman los derechos de petición presentados a la **EDU**, en donde se reconoció que el consorcio adeudaba al señor **ARLEY ARREDONDO** las prestaciones, y el paz y salvo respectivo, y que el citado había cancelado lo debido al demandante por prestaciones, denotándose que ya sabía de antemano que el actor había prestado sus servicios, no siendo cierto su enteramiento de la situación solo al momento de su ingreso al proceso, ya que no es dable que el consorcio con un contrato de esa naturaleza no se dé cuenta de quienes ingresan a esta y que se les adeuda, pues incluso el representante legal de **VIAS S.A.** reconoció que el ingreso y salida de la obra era por lista.

En ese sentido, expuso que no puede tenerse como actuación de buena fe el pago de \$1.972.211 realizado, no con la finalidad de salvar el proceso, sino ante una eventual condena, a efectos de ser tenida como compensación de los pagos.

Por último, en lo atinente a la condena en costas aseveró que según lo estipulado en el artículo 365 CGP, estas se imponen a la parte vencida en juicio, sin revisar posturas de buena o mala fe, y en ese caso, si **ARLEY ARREDONDO** y el consorcio resultaron condenados, las costas no son solidarias, sino en cabeza de cada una, incluyendo a la EDU.

### **ALEGATOS DE CONCLUSIÓN**

Dentro del término otorgado, la mandataria del **DEMANDANTE** presentó alegatos finales aduciendo por un lado que, contrario a lo señalado por el curador del señor **ARLEY ARREDONDO MARTÍNEZ**, no es cierto que no se hubiesen demostrado los extremos de la relación laboral en virtud de la cual su representado laboró en la obra denominada “Circuito Vial Las Mirlas”, aspecto acreditado con las testimoniales escuchadas en el proceso, incluido lo dicho por el administrador del Contrato No. 012 de 2015, señor Jesús Ovidio Zuluaga, quien a su vez es representante de la demandada **VIAS S.A.**, dado que confesó la contratación del señor **ARREDONDO MARTÍNEZ** entre octubre y noviembre de 2015, situación corroborada por documental proveniente de la EDU, tiempo que

concuerta con el periodo de vinculación del actor, aunado a lo dicho por los testigos JEFFERSON SALAZAR MARULANDA y JOHAN ESTEBAN MONTOYA MACHADO en tópicos como la prestación personal del servicio y la subordinación.

En concordancia con ello, expuso que en el fallo de primera instancia no se explican los motivos que llevaron al Juzgado a apartarse de lo señalado por la Sala de Casación Laboral de la Corte a efectos de no darle valor probatorio a la referida liquidación de prestaciones para tomar de allí el salario del demandante, toda vez que personal del consorcio certificó allí que el salario del trabajador era de \$1.200.000 mensuales y \$74.000 de auxilio de transporte, al igual que para no tomar el auxilio de transporte a fin de liquidar las prestaciones, toda vez que, bajo esa idea, resulta un desacierto tener como base salarial la suma de \$845.000, en razón a supuestas manifestaciones del demandante, dado que no existió confesión en ese sentido, motivo por el que deben reliquidarse las condenas.

Seguidamente, expuso que, conforme lo señalado en el artículo 34 CST y Jurisprudencia Especializada, debió condenarse solidariamente a la **EMPRESA DE DESARROLLO URBANO – EDU, VÍAS S.A. y CONSTRUCCIONES y TRACTORES S.A.**, responsabilidad que se extiende, incluso, al pago de la sanción moratoria y la indemnización por despido, como quiera que la conducta a evaluar es la del directo empleador, más no de los demás intervinientes, máxime que la actitud de los integrantes del consorcio estuvo lejos de ser de buena fe.

Por último, indicó que no es procedente la condena solidaria efectuada por el Juzgado en materia de costas, como quiera que cada parte vencida debe efectuar el pago de este emolumento (Archivo 04 ED Tribunal).

De otro lado, la apoderada de la **EMPRESA DE DESARROLLO URBANO – EDU** expuso dentro de sus alegaciones que la decisión de primer grado fue acertada, en tanto logró acreditarse la existencia de una relación de trabajo entre el demandante y el señor **ARLEY ARREDONDO MARTÍNEZ**, vinculo independiente del contrato sostenido entre la **EDU** con el contratista y el subcontratista, atribuyendo entonces responsabilidad al consorcio vial “Las Mirlas” de la celebración de sus contratos o subcontratos, o del personal que participe en la ejecución de las obras, razón por la que se da la falta de legitimación en la causa por pasiva en el caso de su representada.

También dijo que no advertía la intención de evadir el pago de salarios o prestaciones de carácter laboral, pues en el particular el demandante fue vinculado mediante un verdadero contrato de trabajo, momento en el que resaltó que, como intermediaria de la obra, esta entidad requirió al consorcio, quien informó haber realizado el pago correspondiente al señor **ARLEY ARREDONDO MARTÍNEZ**, lo que evidencia un actuar de buena fe de su parte.

Precisamente frente a este último aspecto, dijo que el *A quo* dio una debida resolución al conflicto, y de llegar a ser modificada en segunda instancia, la responsabilidad deberá recaer únicamente frente a **ARLEY ARREDONDO MARTÍNEZ** y **CONSORCIO VIAL LAS MIRLAS** conformado por **CONYTRAC S.A. y VIAS S.A.**, excluyéndose de allí a la **EDU**, en la medida en que esta entidad no tiene la propiedad sobre la obra ejecutada conforme lo estipulado en el artículo 34 CST, punto no acreditado en el proceso, como quiera que al haberse ejecutado la prestación del servicio en vía pública, esta pertenece al ente territorial como tal, sin que sea dable predicar la condición de obligada solidaria. Añadió que, la empresa de desarrollo no se encarga de construir obras, tareas desplegadas por el



demandante, dado que su actividad concierne a “(...) a gestión, planeación y proyección para la futura construcción de obra pública o privada, además del proceso de contratación pública en atención a los principios de selección objetiva que se debe respetar en la administración pública. (...)”.

A renglón seguido señaló que, en el contrato interadministrativo No. 4600049669 suscrito entre la **EDU** y el **MUNICIPIO DE MEDELLÍN**, la primera se obligó a la administración delegada de recursos, sin que su función consistiera en la construcción de obras públicas. De ahí que, para asignarle la citada responsabilidad, debe aparecer acreditada su participación en la administración de los recursos del proyecto, o el proceso de selección de los contratistas, para de esa manera predicar la existencia de beneficio en cabeza de la **EDU**. Por todo lo anterior, peticionó la confirmación de la decisión de primer grado (f. 1 a 6 Archivo 05 ED).

A su turno, la **ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA** manifestó que la relación entre el actor y el contratista fue totalmente ajena a la **EDU**. Con base en esa idea, adujo que, conforme lo estipulado en el artículo 34 CST y el alcance propuesto por la Jurisprudencia de la Sala de Casación Laboral de la CSJ, la procedencia de esta depende de que la actividad generadora de la responsabilidad, sea o se constituya como una función normalmente desarrollada por la empresa beneficiaria, o tenga relación directa o concreta con el desarrollo de la actividad principal de la empresa, aspecto corroborado en pronunciamientos de la Sala Laboral del Tribunal Superior de Antioquia. Lo anterior, a efectos de resaltar que las actividades normales de las **EDU** no se relacionan con las ejecutadas por el **CONSORCIO VIAL LAS MIRLAS** integrado por **CONYTRAC S.A. y VIAS S.A.**, pues ni siquiera el objeto social de estos se relacionan.

En cuanto al llamamiento en garantía dijo que el mismo no procede con base en la póliza de seguro No. 520-47-994000030486, en la que figura como asegurada la **EDU**, y como afianzado el señor **LUIS ALBERTO DE LOS RÍOS PINEDA**, básicamente porque esta fue expedida para garantizar el cumplimiento de las obligaciones derivadas del contrato de consultoría No. 010 de 2015, resaltando precisamente que a través de este proceso no es lo que se busca esclarecer, argumentos que la llevan a insistir en la falta de cobertura de la póliza invocada (f. 1 a 12 Archivo 06 ED Tribunal).

### PROBLEMA JURÍDICO

El problema jurídico que ocupa la atención de la Sala gravita en establecer, primero, la verificación del extremo final de la relación de trabajo concluida por el Juez de primera instancia, que existió entre el señor **RAÚL HERNANDO MONTOYA ARREDONDO**, como trabajador, y el señor **ARLEY ARREDONDO MARTÍNEZ**, en condición de empleador, debiendo estudiarse también cual fue el salario que rigió durante el tiempo de vigencia del contrato. En caso de determinarse el extremo temporal y una remuneración distintas a las fijadas en la sentencia apelada, se analizará si procede la modificación del monto de las prestaciones e indemnizaciones reconocidas en favor del demandante.

Definido lo anterior, procede estudiar la viabilidad de las condenas por concepto de indemnización por despido injusto y la sanción moratoria, así como la posible extensión de estas en cabeza de **CONYTRAC S.A. y VIAS S.A.**, integrantes del **CONSORCIO VIAL LAS MIRLAS**, verificando si hay responsabilidad solidaria de la **EMPRESA DE**

**DESARROLLO URBANO – EDU**, circunstancia que, de salir adelante, conllevaría a que la Sala estudie igualmente la responsabilidad de los llamados en garantía por aquella entidad, estos son, el **MUNICIPIO DE MEDELLÍN** y la **ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA**.

De igual manera, habrá de revisarse la condena en costas en contra de **CONYTRAC S.A. y VIAS S.A.**

### CONSIDERACIONES

Sea lo primero reseñar que en atención a lo normado en el artículo 66A CPT y SS, la decisión de esta instancia se circunscribe a los asuntos materia del recurso de apelación, restricción a la competencia funcional del fallador de segundo grado, que impone el deber de decidir estrictamente dentro del marco fijado en la alzada (SL 2808-2018), con la salvedad hecha para los derechos laborales mínimos e irrenunciables del trabajador (SL8613-2017 y SL12869-2017), según lo expuesto por la Corte Constitucional en la sentencia C-968 de 2003.

Como supuestos de hecho debidamente demostrados en el *sub-lite* se tiene lo siguiente:

- (i) Que la **EMPRESA DE DESARROLLO URBANO – EDU** y el **MUNICIPIO DE MEDELLÍN** suscribieron el contrato interadministrativo No. 4600059669 de 2013, cuyo objeto era la “(...) *GERENCIA Y COORDINACIÓN PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO URBANO INTEGRAL PUI CENTRO ORIENTAL COMUNAS 8 Y 9 (2013-2015)* (...)” (f. 173 a 199 Archivo 01 ED).
- (ii) Que, en virtud de lo anterior, la **EMPRESA DE DESARROLLO URBANO – EDU** suscribió el contrato de obra pública No. 012 de 2015 con el **CONSORCIO VIAL LAS MIRLAS** integrado por **CONYTRAC S.A. y VIAS S.A.**, mismo que tuvo como objeto la “(...) *CONSTRUCCIÓN DEL CIRCUITO VIAL LAS MIRLAS, EN EL MUNICIPIO DE MEDELLÍN* (...)”, del cual se suscribió acta de inicio del 23 de febrero de 2013 (f. 200 a 216 Archivo 01 ED).
- (iii) Que dentro del contrato en comento la **EMPRESA DE DESARROLLO URBANO – EDU** firmó contrato de consultoría No. 010 de 2015 con el señor **LUIS ALBERTO DE LOS RÍOS PINEDA**, con el objetivo de adelantar la “(...) *INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL CIRCUITO VIAL LAS MIRLAS, EN EL MUNICIPIO DE MEDELLÍN* (...)”, garantizado a través de la póliza de seguro de cumplimiento No. 520-47-994000030486 emitida la **ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA** (f. 243 a 262 Archivo 01 ED).

- (iv) Que el señor **RAÚL HERNANDO MONTOYA ARREDONDO** presentó derechos de petición ante la **EMPRESA DE DESARROLLO URBANO – EDU** el 23 de febrero, el 1 de abril, el 11 de julio y el 22 de septiembre de 2016, solicitando el pago de los salarios y prestaciones adeudadas por su labor como maestro de construcción en la obra adelantada en ejecución del contrato del circuito vial *Las Mirlas*, celebrado entre el consorcio del mismo nombre y la citada entidad, rubros dejados de cancelar por el subcontratista **ARLEY ARREDONDO MARTÍNEZ**. No obstante, tales peticiones fueron despachadas negativamente por la demandada en comento, tras considerar que el encargado de su pago lo era el contratista respectivo (f. 67 a 71, 75 y 78 a 83 Archivo 01 ED).
- (v) Que el demandante citó a diligencia de conciliación ante el Ministerio del Trabajo al **CONSORCIO VIAL LAS MIRLAS**, que se llevaría a cabo el 28 de abril de 2016, a la cual no asistió la convocada, emitiéndose la constancia de no comparecencia (f. 73 a 74 Archivo 01 ED).

Precisado lo anterior, y ante la falta de discusión en torno a la existencia de una relación de trabajo entre el señor **RAÚL HERNANDO MONTOYA ARREDONDO** y **ARLEY ARREDONDO MARTÍNEZ**, este último como subcontratista del **CONSORCIO VIAL LAS MIRLAS** integrado por **CONYTRAC S.A.** y **VIAS S.A.**, con el que la **EMPRESA DE DESARROLLO URBANO – EDU** suscribió el contrato de obra pública No. 012 de 2015, que tuvo como objeto la “(...) *CONSTRUCCIÓN DEL CIRCUITO VIAL LAS MIRLAS, EN EL MUNICIPIO DE MEDELLÍN* (...)”, por efectos eminentemente prácticos, de acuerdo con lo argüido en cada uno de los recursos presentados por los apelantes, la Sala analizará, en primera medida, la discusión trazada en torno al extremo final del contrato de trabajo declarado, y seguidamente, la verificación de la asignación salarial, a fin de determinar si hay lugar a modificaciones del tiempo de contrato y las consecuencias económicas que de este emanan.

A continuación, se estudiará lo relacionado con la indemnización por despido, la sanción moratoria, la responsabilidad solidaria de **CONYTRAC S.A.**, **VIAS S.A.** y la **EMPRESA DE DESARROLLO URBANO – EDU**, así como los llamados en garantía por esta última, y lo relacionado con las costas procesales.

### **DEL EXTREMO FINAL Y SALARIO DEL CONTRATO DE TRABAJO**

La conclusión del Juez de primer grado en relación con el tiempo de duración del contrato de trabajo estudiado, apuntó a que dicho vínculo mantuvo su vigencia desde el 12 de octubre hasta el 21 de noviembre de 2015, determinación a la que se opuso principalmente el curador del **DEMANDADO, ARLEY ARREDONDO MARTÍNEZ**, pues sostuvo que la PARTE DEMANDANTE no logró acreditar la calenda hasta la cual se extendió el mencionado vínculo.

Sobre este tópico, anota la Sala que, más allá de la presunción contenida en el artículo 24 CST en cuanto a la existencia de una relación de trabajo, en punto a los extremos

temporales del vínculo jurídico, no queda relevado de prueba el trabajador, pues a partir de estos es que se declara la procedencia de las obligaciones laborales reclamadas. Así se rememoró en sentencia SL728-2021, que recordó lo expuesto en sentencia SL2608-2019, que reiteró lo dicho en la providencia CSJ SL 2780-2018, la que a su vez trajo a colación la sentencia CSJ SL, 6 mar. 2012, rad. 42167, en la cual consideró:

*“(…) recuerda la Corte que la circunstancia de quedar demostrada la prestación personal del servicio, debiéndose presumir la existencia del contrato de trabajo en los términos del artículo 24 del Código Sustantivo del Trabajo, no releva al demandante de otras cargas probatorias, pues además le atañe acreditar ciertos supuestos transcendentales dentro de esta clase de reclamación de derechos, como por ejemplo los extremos temporales de la relación, el monto del salario, su jornada laboral, el trabajo en tiempo suplementario si lo alega, el hecho del despido cuando se demanda la indemnización por terminación del vínculo sin justa causa, entre otros. (...)”.*

Ello, por cuanto, según lo advierte la Corporación (CSJ SL2536-2018), si bien los mismos no hacen parte de los elementos constitutivos del contrato, *“(…) su determinación es inherente a la misma vigencia de la prestación del servicio, en la medida que solo a través de su conocimiento es posible establecer el interregno por el que se prolongó la relación laboral y el quantum de las obligaciones correlativas que le incumben al empleador, por el mismo periodo (...)”.*

Vista entonces la relevancia y necesidad de tener certeza o siquiera proximidad de los límites temporales de la relación laboral, se aboca la Sala a verificar si de las pruebas adosadas al plenario es posible establecer, como lo hizo el Juez de primer grado, la calenda del finiquito contractual, o, por el contrario, según lo manifestado por el apelante descrito, no hay forma de fijar tal información.

Para ello, se tiene que en el curso de la primera instancia fueron escuchados por solicitud de la parte demandante, los señores JEFFERSON SALAZAR MARULANDA (Min. 16:20 a 51:10 Archivo 06 ED Parte 1º) y JHOAN ESTEBAN MONTOYA MACHADO (Min. 13:00 Parte 5º a 30:17 Parte 6º Archivo 06 ED). El primero, quien adujo conocer al demandante precisamente por sus labores en la obra adelantada en el circuito vial “Las Mirlas”, vinculados por el contratista **ARLEY ARREDONDO MARTÍNEZ**, expresó que el actor ingresó tiempo después de él, y laboraron juntos hasta el 21 de noviembre de 2015, fecha en la que una persona del consorcio les dijo que ya no podían trabajar más en ese lugar, información que dijo, les fue corroborada por el empleador.

El segundo de los deponentes, hijo del accionante, señaló también haber laborado en la misma obra y al mando del mismo empleador, e indicó en punto de la terminación, que el contrato culminó para todos a mediados del mes de noviembre de 2015, lo que les fue informado por una ingeniera de la obra, la que les manifestó que ya no podrían seguir laborando allí.

Valga anotar que, si bien los apoderados de las demandadas cuestionaron en cierta medida la veracidad y transparencia de los testigos memorados en atención a que estos también adelantaron controversias judiciales por motivos similares a los del actual proceso, y al vínculo de familiaridad de uno de ellos con el demandante, lo que, a juicio de estos, nubla la imparcialidad de aquellos, al contrastar los dichos de los declarantes con la prueba documental arrojada al plenario, se encuentra que aquella información tiene respaldo en el

proyecto de liquidación visible a folio 357 Archivo 01 ED, que aparece rotulado bajo la denominación “*Construcción Techos y Pisos Arley Arredondo*”, en el cual se tiene como fecha de liquidación del actor el **21 de noviembre de 2015**, documento que no fue objeto de desconocimiento en los términos del artículo 272 CGP, y en ese caso, era viable tener en consideración su contenido como prueba del mojón final del vínculo jurídico dado entre las partes.

Ahora, lo anterior cobra mayor robustez, si se tiene en cuenta que la documental evocada fue enviada al demandante por la misma demandada **VÍAS S.A.**, quien, según los dichos de su representante, señor JESÚS OVIDIO ZULUAGA (Min. 57:12 Audio 1° a 14:10 Audio 2° Archivo 10 ED), era la que llevaba la administración o liderazgo del CONSORCIO VIAL LAS MIRLAS, remitiendo el documento reseñado a través de correo electrónico del 31 de mayo de 2016, dirigido por la señora Paula Andrea Franco – Jefe de Gestión Humana de esa empresa, quien a su vez, previamente habría recibido esa información desde el consorcio a través de la misma vía (25 de mayo de 2016) (f. 354 a 355 Archivo 01 ED), supuestos que tampoco fueron negados o controvertidos por las integrantes del citado ente consorcial, más cuando eran los datos que poseían en relación con el demandante. De ahí que lo anterior sea suficiente para mantener lo señalado en la sentencia apelada en referencia al extremo final definido en primer grado.

Tal determinación, debe destacarse, no resulta afectada por el hecho de que, en la historia laboral de aportes a pensión del accionante, para los periodos de octubre a noviembre de 2015, se registren cotizaciones por cuenta de otros empleadores (f. 54 a 65 Archivo 01 ED), según lo alegan en la alzada, pues esta circunstancia, itera la Corporación, no desdice el periodo laborado en estudio, como quiera que al tenor del artículo 26 CST, el trabajador puede realizar varias actividades remunerativas al tiempo, salvo que medie exclusividad en una de ellas, caso en el que estaría obligado a desarrollar solo esa, empero, esa prohibición no se puso de presente en el asunto en cuestión.

De otro lado, con relación al salario precisado en la sentencia estudiada, correspondiente a la suma \$845.000 mensuales, se precisa que no ocurre lo mismo. Lo anterior, como quiera que el sustento del Juzgado para tomar ese valor como estipendio mensual, deriva presuntamente de lo confesado por el demandante a la hora de rendir interrogatorio de parte. Sin embargo, es pertinente recordar que, sobre el mérito probatorio del interrogatorio de parte se ha referido por la Corte Suprema para decir que aquel solo constituye medio probatorio cuando contenga una **confesión**, lo que deviene de sus elementos configurativos, siendo uno de ellos, que verse sobre hechos que contengan consecuencias adversas al confesante, o que benefician a la parte contraria (Art. 191 CGP); ello porque como es sabido, a nadie le es dable crear su propia prueba.

En esa dirección ha precisado la Corporación, «*el documento en que se expresa por una de las partes la ocurrencia de un hecho que le favorece, no es prueba de su existencia, porque ello iría contra el principio según el cual, la parte no puede fabricar su propia prueba*» (CSJ, SL 29 sept. 2005, rad. 24450), criterio que ha sido reiterado en providencias CSJ SL, 2 jul. 2008, rad. 24450, y CSJ SL17191-2015, entre otras.

Así entonces, reexaminado el interrogatorio rendido por el señor **RAÚL HERNANDO MONTOYA ARREDONDO** (Min. 04:22 Parte 3° a 07:16 Parte 5° Archivo 06 ED), justamente en lo correspondiente al salario, se observa que lo realmente expuesto por el actor fue que la contraprestación pactada con el señor **ARLEY ARREDONDO MARTÍNEZ**, ascendía a la suma de \$840.000 catorcenales, dato que precisó en más de una ocasión durante la diligencia, sin que en parte alguna hubiere aceptado, en perjuicio suyo, que dicho valor constituía el pago mensual, como lo entendió el A quo.

No obstante, lo anterior no implica, entonces, que deban acogerse los argumentos blandidos por aquellos que apelaron en este punto (apoderados de **ARLEY ARREDONDO MARTÍNEZ** y de las sociedades integrantes del consorcio), para decir que en realidad no hay prueba del salario, y, por consiguiente, debe tenerse como tal, el equivalente al SMLMV de la época, pues si bien es cierto que echa de menos el expediente prueba que corrobore que el salario del demandante lo era el expuesto en la demanda, no encuentra la Sala motivo para rechazar los datos puntualizados en el estimativo de la liquidación de prestaciones de folios 357 Archivo 01 ED, en donde se puntualiza como remuneración del señor **MONTOYA ARREDONDO** la suma de \$1.200.000, más el auxilio de transporte por valor de \$74.000.

CONSTRUCCIÓN TECHOS Y PISOS ARLEY ARREDONDO NIT 98.631.581-1 LIQUIDACION DE PRESTACIONES SOCIALES	
NOMBRE EMPLEADO	RAUL HERNANDO MONTOYA ARREDONDO
CEDULA	71.655.662
FECHA INICIAL	21-Oct-2015
FECHA LIQUIDACION	21-Nov-2015
SALARIO BASICO	1.200.000
AUX. TRANSPORTE	74.000

En ese sentido, más allá de que el extremo demandante insista en que la suma allí descrita no tuviera relación con el valor pactado en realidad con quien fuera su patrono, lo preponderante es que, conforme el origen de estos datos, era la información que reposaba en el CONSORCIO VIAL LAS MIRLAS, por lo que, a falta de prueba del salario alegado desde el gestor, nada obsta para que se tenga como la contraprestación esa cifra, a efectos de calcular los salarios y prestaciones invocados como adeudados en su favor. Ello atendándose además que según se expuso en esta Litis, fue el dato considerado por la administradora del consorcio – VIAS SA - para determinar las obligaciones pendientes en favor del trabajador, y que saldó ante el impago por su directo empleador.

Así entonces, realizados los cálculos de rigor, teniendo como base un total de 40 días de labores (contados conforme el artículo 134 CST y Sentencia SL CSJ Rad. 32297 del 5 de febrero de 2008) se observa que, por salarios, prestaciones sociales y vacaciones, al demandante le asistía derecho a recibir los siguientes valores:

LIQUIDACIÓN DEFINITIVA					
PERIODO A LIQUIDAR	12/10/2015	21/11/2015			
DÍAS LIQUIDAR		40			
AÑO	DÍAS LABORADOS	SALARIO	TRANSPORTE	SALARIO BASE	
SALARIO A 2015:	40	\$ 1.200.000,00	\$ 74.000	\$ 1.274.000,00	
AÑO	SALARIOS	CESANTÍAS	INTERESES A LAS CESANTÍAS	PRIMA DE SERVICIOS	VACACIONES
2015	\$ 1.600.000,00	\$ 141.555,56	\$ 1.887,41	\$ 141.555,56	\$ 66.666,67
TOTAL	\$ 1.600.000,00	\$ 141.555,56	\$ 1.887	\$ 141.556	\$ 66.666,67

**TOTAL: \$1.951.665,19.**

Sin embargo, no hay lugar a emitir orden tendiente la cancelación de ninguno de estos conceptos, en atención a que se encuentran cubiertos con los pagos efectuados por el CONSORCIO VIAL LAS MIRLAS, a través de **VÍAS S.A.**, que en total suman **\$2.521.211**, pagos efectuados por abonos parciales, según lo aceptado por el propio demandante, así, el primero por la suma de \$549.000, y un depósito judicial constituido el 24 de marzo de 2017 por valor de \$1.972.211 (f. 340 Archivo 01 ED), cifra que también admitió haber recibido el accionante.

### **DE LA INDEMNIZACIÓN POR DESPIDO INJUSTO**

En lo relacionado con la indemnización por despido sin justa causa, la Jurisprudencia Especializada ha decantado de vieja data, que al trabajador le corresponde probar el hecho del despido, y al empleador corresponde probar su justificación (Sentencia SL 1166-2018).

Vistas las reglas probatorias de cara a establecer la responsabilidad en el hecho del despido, y la imposición de las consecuencias pecuniarias que reviste tal decisión, el Despacho de primera instancia encontró que el demandante había sido objeto de desvinculación injusta, haciéndose acreedor al pago de la indemnización establecida en la ley para tal hecho.

Empero, esta conclusión encontró resistencia en los apoderados de **ARLEY ARREDONDO MARTÍNEZ, CONYTRAC S.A. y VIAS S.A.**, fincados en la idea de no estar acreditado el hecho del despido, yendo incluso más allá, en tanto el mandatario de las últimas, expuso que la decisión de no seguir laborando fue tomada por una ingeniera de la obra, que no permitió más el ingreso al sitio, pero que, por tratarse de un tercero ajeno a la relación laboral, y siendo el empleador el legitimado para culminar el contrato, dicho suceso no puede tenerse como un despido.

En cierta medida, el planteamiento que precede se ajusta a la realidad, toda vez que los testigos JEFFERSON SALAZAR MARULANDA (Min. 16:20 a 51:10 Archivo 06 ED Parte 1°) y JHOAN ESTEBAN MONTOYA MACHADO (Min. 13:00 Parte 5° a 30:17 Parte 6° Archivo 06 ED), explicaron que la paralización de actividades en el circuito vial de “Las Mirlas” obedeció a lo señalado por la ingeniera residente, la cual, en noviembre de 2015, al disponerse los trabajadores a iniciar sus labores del día, les indicó que no iban a continuar allí, toda vez que no querían seguir con el vínculo que hasta ese momento sostenían con el señor **ARLEY ARREDONDO MARTÍNEZ**.

Hasta allí, el análisis que a primera vista se ofrece de esta situación llevaría a decir que, en efecto, el retiro del personal de lugar de las obras, incluido el demandante, se dio por decisión de una persona ajena a la relación obrero-patronal; sin embargo, no puede perderse de vista el detonante para arribar a esa determinación, punto en el que cobra relevancia lo manifestado por el señor JESÚS OVIDIO ZULUAGA (Min. 57:12 Audio 1° a 14:10 Audio 2° Archivo 10 ED) representante legal de **VIAS S.A.**, pues si bien no confesó, si puso en

contexto una circunstancia importante para el tópico estudiado, esto es, que el subcontratista **ARREDONDO MARTÍNEZ** pese a que fue contratado en la obra adelantada por el CONSORCIO VIAL LAS MIRLAS para realizar unos cordones y jardines en un periodo aproximado de dos (2) meses, no terminó la obra, y se fue, abandonando esta, sin que después hubieren podido contactarlo.

Lo expuesto muestra que, la decisión de no permitir el ingreso a la obra del personal bajo el mando de la persona natural en cuestión, no obedeció a una decisión caprichosa del consorcio, sino a la actitud desidiosa y consecuente ausencia de este empleador, que, según se extracta de la remembranza que antecede, abandonó sin más el compromiso contractual con el ente consorcial, y de paso, dejó en el limbo a sus trabajadores, pasando por encima de sus garantías y derechos mínimos, cuestión que, para la Sala, pese a no existir una manifestación expresa de su parte tendiente a dar por finalizada la relación con sus trabajadores, **si debe considerarse como un rompimiento abrupto de la relación, atribuible exclusivamente a aquel**, situación acentuada por la propia actitud adoptada, seguido de la suspensión de actividades en el sitio de las obras, por cuanto no volvió a aparecer, a fin de indicarles a su grupo de empleados las actuaciones o tareas a realizar, postura que no se erige como justificante al tenor de las causales establecidas en el artículo 62 CST, y por tanto, procede confirmar la concesión de esta indemnización.

De ahí que, al tasarse este concepto, teniendo en cuenta la asignación salarial ajustada según lo considerado en líneas anteriores (\$1.200.000), su cuantía asciende a la suma de \$1.200.000, conforme las reglas de liquidación del artículo 64 CST, pero que, al imputársele el saldo restante de los pagos efectuados por las codemandadas, que superó el importe de las prestaciones liquidadas anteriormente en \$569.545,00, queda pendiente de pago la cifra de \$630.455, el cual deberá ser asumido por el señor **ARLEY ARREDONDO MARTÍNEZ**, y las sociedades **CONYTRAC S.A. y VIAS S.A.**, integrantes del CONSORCIO VIAL LAS MIRLAS, en virtud de la responsabilidad solidaria endilgada a éstas en primera instancia, de lo que no presentaron controversia. En tal virtud habrá de modificarse la decisión de primera instancia en este aspecto.

## **DE LA INDEMNIZACIÓN MORATORIA**

El apoderado de **ARLEY ARREDONDO MARTÍNEZ** recurrió el reconocimiento de esta sanción, fundamentado en que el actuar de su prohijado estuvo revestido de buena fe, presupuesto que no fue desvirtuado por las pruebas, máxime que esta indemnización no opera de forma automática.

Para desatar este embate, huelga recordar que, como bien lo adujo el recurrente, al tenor del artículo 65 CST, la procedencia de la indemnización moratoria no es de aplicación automática, **sino que deben examinarse las circunstancias por la cuales el empleador no canceló a la finalización los salarios y prestaciones debidos, y en el evento de considerar justificado su comportamiento, debe ser exonerado de esta sanción.**

Sobre esta indemnización, la Jurisprudencia de la Sala de Casación laboral de la Corte Suprema de Justicia, reiterada, por ejemplo, en la sentencia SL2258-2022, ha señalado que puede salvarse al empleador de la imposición de esta condena, cuando manifiestamente se advierta que está ausente de cualquier intención de perjudicar patrimonialmente al



trabajador, requiriéndose del juzgador, el examen de la conducta del empleador a efectos de determinar si las razones que lo llevaron a no pagarle al trabajador los salarios y prestaciones sociales al terminar el contrato, son serias, objetivas y atendibles, en tanto pueden surgir elementos que produzcan en el operador judicial la convicción de que la conducta del empleador no fue la de desconocer la ley, ni los derechos legítimos del trabajador, ni de aprovecharse de su condición, sino una simple equivocación o creencia errada, hipótesis en la que puede eximirse de la sanción.

Precisado lo anterior en el evento particular analizado, la Sala no avista razones atendibles y serias que permitan justificar el actuar del citado demandado para sustraerse del pago de los salarios y prestaciones sociales a las que tuvo derecho el demandante durante la vigencia de la relación laboral expuesta a instancias del actual proceso, como quiera que, de las pruebas recaudadas en el curso del litigio, logra edificarse que siempre fue una tendencia la del no pago de ningún derecho salarial o prestacional en favor del empleado, tanto que, abandonó todos sus compromisos, forzando la terminación del vínculo, y dejó a sus trabajadores a la deriva, en un estado de incertidumbre que solo viene a ser aclarada en sede judicial.

De contera que, al no advertirse rasgo alguno de buena fe en el accionado, genera la consecuencia ineludible de asumir el pago de la indemnización moratoria estudiada.

En consecuencia, teniendo en cuenta la base salarial ajustada en esta instancia (\$1.200.000), y los 483 días en los que se causó la indemnización moratoria, según conclusión del *A quo* (aspecto este último que no fue objeto de reparo en la alzada), aquella asciende a la suma de **\$19.320.000**, punto respecto del cual se modificará de la decisión inicial.

Valga aclarar que, el estudio concerniente a que se ordene a **CONYTRAC S.A. y VIAS S.A.**, así como a la **EMPRESA DE DESARROLLO URBANO – EDU**, a responder solidariamente por la sanción moratoria, según apelación de la PARTE DEMANDANTE, se abordará de manera conjunta a continuación.

### **DE LA RESPONSABILIDAD SOLIDARIA**

Expone la apelante activa, de un lado, que la responsabilidad solidaria debió extenderse, primero, de manera completa, incluyendo las indemnizaciones, en especial la moratoria, en cabeza de las demandadas **CONYTRAC S.A. y VIAS S.A.**, y, segundo, que debió declararse solidariamente responsable a la **EMPRESA DE DESARROLLO URBANO – EDU**, conforme los presupuestos legales y jurisprudenciales.

Con la finalidad de resolver este punto hay que reseñar lo expuesto por la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia, entre otras, en sentencias SL14692-2017, SL4400-2014, del 26 de mar. 2014, rad. 39000, y 20 de mar. 2013, rad.40.541, en las que se dijo que, para configurar la solidaridad descrita en el artículo 34 CST, la actividad ejecutada por el contratista independiente debe cubrir una necesidad propia del beneficiario, o debe corresponder a una función directamente vinculada con la ordinaria explotación de su objeto social. Así mismo, **el Alto Tribunal indicó en las providencias mencionadas que para la determinación de la solidaridad se debe tener en cuenta no sólo el objeto social del contratista y beneficiario, sino también las características de la actividad específica desarrollada por el trabajador.**

Sobre el punto subrayado, en Sentencia SL1017-2019 del 12 de febrero de 2019 el Órgano de Cierre en Materia Ordinaria, rememoró su postura frente la solidaridad estudiada en Sentencia SL217-2018 en la que reseñó:

*“(…) Esta Sala en sentencia SL4400-2014, del 26 de mar. 2014, rad. 39000, rememoró lo enseñado en decisión SL, del 20 de mar. 2013, rad.40.541, en torno a que la solidaridad se presenta cuando la actividad ejecutada por el contratista independiente cubre una necesidad propia del beneficiario y, además, cuando constituye una función directamente vinculada con la ordinaria explotación de su objeto social, que por lo mismo desarrolla éste.*

*Igualmente se exhibe importante recordar que para su determinación puede tenerse en cuenta no sólo el objeto social del contratista y del beneficiario de la obra, sino también las características de la actividad específica desarrollada por el trabajador.*

*Así se explicó en la sentencia SL, del 2 de jun. 2009, rad. 33082:*

*[...]*

*Con todo, encuentra la Corte, como lo ha explicado en anteriores oportunidades, que, de cara al establecimiento de la mencionada solidaridad laboral, en los términos del artículo 34 del Código Sustantivo del Trabajo, lo que debe observarse no es exclusivamente el objeto social del contratista sino, en concreto, que la obra que haya ejecutado o el servicio prestado al beneficiario o dueño de la obra no constituyan labores extrañas a las actividades normales de la empresa o negocio de éste. Y desde luego, en ese análisis cumple un papel primordial la labor individualmente desarrollada por el trabajador, de tal suerte que es obvio concluir que sí, bajo la subordinación del contratista independiente, adelantó un trabajo que no es extraño a las actividades normales del beneficiario de la obra, se dará la solidaridad establecida en el artículo 34 citado. (…)*. (Subraya de la Sala).

Sentados los parámetros legales y jurisprudenciales de la solidaridad predicada, en lo concerniente a **CONYTRAC S.A. y VIAS S.A.**, se hace menester relevar que no fue objeto de discusión su posición de responsables solidarios, considerada por el Juez de primer grado. Luego, en cuanto a la **EMPRESA DE DESARROLLO URBANO – EDU**, desde la contestación a la demanda se ha aceptado que su objeto social versa sobre “(…) *la gestión y operación urbana e inmobiliaria, el desarrollo, la ejecución, asesoría y la consultoría de planes, programas y proyectos urbanos e inmobiliarios, en el ámbito municipal, departamental, nacional e internacional* (…)” (f.156 Archivo 01 ED), marco de actuaciones en virtud de las cuales suscribió el contrato de obra pública No. 012 de 2015 con el CONSORCIO VIAL LAS MIRLAS integrado por **CONYTRAC S.A. y VIAS S.A.**, mismo que tuvo como objeto la “(…) **CONSTRUCCIÓN DEL CIRCUITO VIAL LAS MIRLAS, EN EL MUNICIPIO DE MEDELLÍN** (…)” (f. 200 a 216 Archivo 01 ED).

Fue en la ejecución del contrato de obra pública en comento que el CONSORCIO VIAL LAS MIRLAS contrató a **ARLEY ARREDONDO MARTÍNEZ** para adelantar, según el representante legal de la empresa **VÍAS S.A.**, señor **JESÚS OVIDIO ZULUAGA** (Min. 57:12 Audio 1° a 14:10 Audio 2° Archivo 10 ED), la construcción de “cordones” y “jardines” dentro del circuito de vías que se edificaban, actividad en la que se subcontrató al demandante para ejercer de maestro de construcción, función que claramente de interrelaciona con la ejecución del “(…) **PROYECTO URBANO INTEGRAL PUI CENTRO ORIENTAL COMUNAS 8 Y 9 (2013-2015)** gestionado por la **EMPRESA DE DESARROLLO URBANO – EDU**, por lo que puede colegirse que las labores del demandante son conexas a una parte de la actividad misional o social de la **EDU**, en tanto contribuyó con su labor a la ejecución de las obras asignadas a la empresa de desarrollo para su consecución.

Dicha condición, es decir, la de responsable solidaria, debe recordarse, es asignada por la ley a aquellas personas, sea naturales o jurídicas, **de orden privado o público, que acuden a terceros independientes para el desarrollo de actividades normales de su negocio o empresa o conexas a ellas**, razones por las que se entiende que, conforme lo dispuesto en el artículo 34 CST, se configuran las razones jurídicas para que la **EDU**, contrario a lo señalado por el Juez de primer grado, como encargada de gestar y concretar la obra en la que laboró el señor **RAÚL HERNANDO MONTOYA ARREDONDO**, deba responder solidariamente por las obligaciones laborales que surgieron en favor de ese ex trabajador.

Valga relieves en este punto que, al ser considerada como obligada solidaria, ello implica que tenga a su cargo igualmente el deber de responder, además de los salarios y prestaciones sociales, por las indemnizaciones que se generen a favor del trabajador, dentro de las que claramente se encuentra la dispuesta en el artículo 65 CST, tal como lo señaló la Sala de Casación Laboral de la CSJ en Sentencia SL497-2022, en la que se recordó lo dicho en Sentencia SL12234-2014:

*“(...) conviene memorar que el artículo 34 del Código Sustantivo del Trabajo refiere que son contratistas independientes y, en tal sentido, verdaderos empleadores, quienes ejecuten una o varias obras o cualquier servicio en favor de un tercero, por un precio determinado, con la asunción de todos los riesgos y la utilización de sus propios medios, con libertad y autonomía técnica y directiva en la realización del objeto contratado (...).*

**En dicho precepto se impone la solidaridad al beneficiario o dueño de la obra, respecto del valor de los salarios, indemnizaciones y prestaciones sociales, cuando lo contratado obedezca a actividades normales de su empresa o negocio**, sin perjuicio de que “estipule con el contratista las garantías del caso o para que se repita contra él lo pagado. El beneficiario del trabajo o dueño de la obra también será solidariamente responsable en las condiciones fijadas en el inciso anterior, de las obligaciones de los subcontratistas frente a sus trabajadores, aun en el caso de que los contratistas no estén autorizados para contratar los servicios de los subcontratistas (...)” (Subraya y Negrilla de la Sala)

Lo expuesto, además de que zanja la discusión respecto a la responsabilidad a cargo de la **EMPRESA DE DESARROLLO URBANO – EDU**, y hasta donde se extiende la misma, también permite dejar sin piso lo argumentado por el Juez de instancia para absolver de responsabilidad por este concepto a las sociedades **CONYTRAC S.A. y VIAS S.A.**

Lo anterior toda vez que, en el caso de estas últimas, para la definición de la responsabilidad solidaria que les incumbe como integrantes del consorcio responsable de la obra para la cual fue contratado el empleador incumplido, no se da lugar al análisis de las circunstancias de buena o mala fe de aquellas, de cara a imponerles el pago solidario de las obligaciones a cargo de dicho empleador, incluidas en estas claro está, la indemnización de que trata el artículo 65 CST; siendo menester únicamente, la verificación acerca de la existencia de los presupuestos para predicar la solidaridad de tales entidades respecto de las acreencias cuya condena se impone en esta Litis. La procedencia de la sanción moratoria parte del análisis de la actitud del empleador, no de los obligados solidarios con este, quienes tienen la acción para repetir por las acreencias a cuyo pago se ven compelidos, contra el empleador, como directo responsable.

En consecuencia, habrá de revocarse parcialmente la decisión de primera instancia, en el punto relativo a la absolución de las sociedades **CONYTRAC S.A.** y **VIAS S.A.** de responder solidariamente por la indemnización moratoria reconocida en favor del actor, y a su vez, la absolución de la **EMPRESA DE DESARROLLO URBANO – EDU** de responder solidariamente por los conceptos indemnizatorios que se ordena pagar en favor del demandante.

Al imponerse órdenes económicas en cabeza de la **EMPRESA DE DESARROLLO URBANO – EDU**, debe proceder esta Corporación al estudio de los llamamientos formulados por aquella en contra del **MUNICIPIO DE MEDELLÍN** y la **ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA**.

Establece el artículo 64 del CGP que: “(...) *Quien afirme tener derecho legal o contractual a exigir de otro la indemnización del perjuicio que llegare a sufrir o el reembolso total o parcial del pago que tuviere que hacer como resultado de la sentencia que se dicte en el proceso que promueva o se le promueva, o quien de acuerdo con la ley sustancial tenga derecho al saneamiento por evicción, podrá pedir, en la demanda o dentro del término para contestarla, que en el mismo proceso se resuelva sobre tal relación (...)*”

Dicha figura tiene por objeto exigir a un tercero la indemnización del perjuicio que llegare a sufrir el demandado, o el reembolso total o parcial del pago que tuviere que hacer como resultado de la sentencia.

En ese caso, la convocatoria del **MUNICIPIO DE MEDELLÍN** surge en virtud del contrato interadministrativo No. 4600059669 de 2013, cuyo objeto era la “(...) *GERENCIA Y COORDINACIÓN PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO URBANO INTEGRAL PUI CENTRO ORIENTAL COMUNAS 8 Y 9 (2013-2015) (...)*” (f. 173 a 199 Archivo 01 ED). Sin embargo, revisado en detalle el cuerpo del contrato, no se observa dentro de su clausulado el compromiso asumido por el ente territorial, que legitime su llamado por parte de la **EDU** para reembolsar a este o responder por las condenas que llegasen a serle impuestas en el curso de procesos como el analizado, puesto que, incluso, en la *Cláusula Sexta -Literal I*, contentiva de las obligaciones del Municipio, se estipula, *contrario sensu*, su facultad de llamar a la **EDU** en garantía cuando sea demandado por hechos o causas relacionadas con los contratos derivados del acuerdo interadministrativo, aunado al acuerdo de indemnidad de la *cláusula décima séptima*, por la cual la **EDU** se obliga a mantener libre al Municipio de cualquier daño o perjuicio originado por reclamaciones de terceros, derivadas de sus subcontratistas o independientes, circunstancias juntas que hacen que decaer de entrada el llamamiento efectuado por la **EMPRESA DE DESARROLLO URBANO**.

Igual suerte corre lo pretendido por la **EDU** en relación con la llamada **ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA**, como quiera que, al revisar la póliza No. 520-47-994000030486 en la que se cimentó su llamado a este proceso, observa la Sala que el afianzado o tomador es el señor LUIS ALBERTO DE LOS RÍOS PINEDA, quien fungía como *interventor del contrato de obra correspondiente a la construcción del circuito vial “Las Mirlas”*, para lo cual suscribió el contrato de consultoría No. 010 de 2015, evidenciándose, sin hacer mayor disquisición, que los riesgos amparados en el contrato de seguros invocado, conciernen exclusivamente al incumplimiento del acuerdo contractual con el interventor, y en parte alguna eso incluye las actuaciones de Consorcio. De ahí que no sea dable imponer a la aseguradora obligación económica alguna (243 a 262 Archivo 01 ED).

Con base en lo expuesto, habrá de mantenerse la absolución de las entidades llamadas en garantía.

Por último, frente a la condena en costas, cuestionada por los apoderados del **DEMANDANTE**, y de las demandadas **CONYTRAC S.A.** y **VIAS S.A.**, es menester indicar que, al tenor del numeral 1° del artículo 365 CGP “(...) *Se condenará en costas a la parte vencida en el proceso, o a quien se le resuelva desfavorablemente el recurso de apelación, casación, queja, súplica, anulación o revisión que haya propuesto. Además, en los casos especiales previstos en este código. (...)*”, normativa que también dispone que, en el caso de ser varios los litigantes que deben asumir el pago de costas “(...) *el juez los condenará en proporción a su interés en el proceso; si nada se dispone al respecto, se entenderán distribuidas por partes iguales entre ellos. (...)*”, disposición que, en efecto, en modo alguna contempla la asunción de este rubro procesal de manera solidaria, como lo definió el *A quo*.

En ese contexto, y atendiendo a que las condenas se ampliaron en esta sede en contra de **CONYTRAC S.A.** y **VIAS S.A.**, extendiéndose, incluso a la **EMPRESA DE DESARROLLO URBANO**, se modificará lo atinente a la condena en costas de primera instancia, a fin de disponer que las mismas están a cargo de los demandados, conforme lo establecido en la norma en cita, por haber resultado vencidos en el proceso.

Con todo, habrá de modificarse y revocarse parcialmente la sentencia de primera instancia en los términos descritos, confirmándose en lo demás la decisión confutada. Las costas de segunda instancia estarán a cargo de **ARLEY ARREDONDO MARTÍNEZ CONYTRAC S.A.** y **VIAS S.A.**, dado que sus recursos fueron resueltos de manera desfavorable, a lo que se incluye como agencias en derecho de esta sede la suma equivalente a MEDIO (1/2) SMLMV a cargo de cada una.

Sin que sean necesarias más consideraciones, la **SALA QUINTA DE DECISIÓN LABORAL DEL TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE MEDELLÍN**, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la Ley,

## RESUELVE

**PRIMERO: REVOCAR** parcialmente el numeral **CUARTO** de la Sentencia No. 230 del 14 de septiembre de 2021, proferida por el Juzgado Décimo Laboral del Circuito de Medellín, en lo que respecta a la absolución de la **EMPRESA DE DESARROLLO URBANO – EDU**.

**SEGUNDO: MODIFICAR** los numerales **SEGUNDO, TERCERO y SEXTO** de la sentencia apelada, en el sentido de:

- **CONDENAR** al DEMANDADO **ARLEY ARREDONDO MARTÍNEZ**, como EMPLEADOR, y solidariamente a **CONYTRAC S.A.**, **VIAS S.A.** y **EMPRESA DE DESARROLLO URBANO – EDU**, a responder por la suma de SEISCIENTOS TREINTA MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS MONEDA CORRIENTE (\$630.455,00 m/l), saldo adeudado

al señor **RAÚL HERNANDO MONTOYA ARREDONDO** por concepto de la indemnización por despido injusto.

- **CONDENAR** a los demandados **ARLEY ARREDONDO MARTÍNEZ, CONYTRAC S.A.**, como EMPLEADOR, y solidariamente a **CONYTRAC S.A., VIAS S.A. y EMPRESA DE DESARROLLO URBANO – EDU**, a responder por la suma de DIECINUEVE MILLONES TRESCIENTOS VEINTE MIL PESOS MONEDA CORRIENTE (\$19.320.000,00 m/l), por concepto de indemnización moratoria de que trata el artículo 65 CST, en favor del DEMANDANTE, señor **RAÚL HERNANDO MONTOYA ARREDONDO**.
- **SE DISPONE** que las costas de primera instancia están a cargo de cada uno de los demandados **ARLEY ARREDONDO MARTÍNEZ, CONYTRAC S.A., VIAS S.A. y la EMPRESA DE DESARROLLO URBANO – EDU**, conforme lo establecido en el artículo 365 CGP, por haber resultado vencidos en el proceso. Tásense por la primera instancia.

**TERCERO: CONFIRMAR** en lo demás la sentencia confutada.

**SEGUNDO:** Las **COSTAS** de esta instancia están a cargo de **ARLEY ARREDONDO MARTÍNEZ, CONYTRAC S.A. y VIAS S.A.**, incluyendo como agencias en derecho la suma equivalente a MEDIO (1/2) SMLMV a cargo de cada uno de ellos.

**NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE**

Los Magistrados,

  
MARIA NANCY GARCÍA GARCÍA  
Magistrada

  
VÍCTOR HUGO ORJUELA GUERRERO  
Magistrado

  
SANDRA MARÍA ROJAS MANRIQUE  
Magistrada

ANEXO 1°.

LIQUIDACIÓN DEFINITIVA					
PERIODO A LIQUIDAR	12/10/2015	21/11/2015			
DÍAS LIQUIDAR		40			
AÑO	DIAS LABORADOS	SALARIO	TRANSPORTE	SALARIO BASE	
SALARIO A 2015:	40	\$ 1.200.000,00	\$ 74.000	\$ 1.274.000,00	
AÑO	SALARIOS	CESANTÍAS	INTERESES A LAS CESANTÍAS	PRIMA DE SERVICIOS	VACACIONES
2015	\$ 1.600.000,00	\$ 141.555,56	\$ 1.887,41	\$ 141.555,56	\$ 66.666,67
TOTAL	\$ 1.600.000,00	\$ 141.555,56	\$ 1.887	\$ 141.556	\$ 66.666,67